



DES01/06/11/0002-DES10/02
FJ

RESOLUCIÓN

Visto el expediente relativo al deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 39.142 metros de longitud, que comprende las marismas del río Barbate, en los términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz).

ANTECEDENTES:

I) Por O.M. de 21 de febrero de 2010 se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 39.142 metros de longitud, que comprende las marismas del río Barbate, en los términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz).

II) La Audiencia Nacional dictó Sentencia estimatoria con fecha 18 de abril de 2013, declarada firme posteriormente, en el recurso contencioso-administrativo nº 416/2010, interpuesto por D. Braulio Crespo Pinto, contra la O.M. de 21-02-2010, aprobatoria del deslinde, anulándola. El recurso solicitaba la reducción de la anchura de la zona de servidumbre de protección a 20 metros, entre los vértices M-7 a M-11.

La sentencia de la Audiencia Nacional, en su parte dispositiva, dispone lo siguiente:

"FALLAMOS Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por (...) contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de fecha 21 de febrero de 2010, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de unos treinta y nueve mil ciento cuarenta y dos metros de longitud, que comprende las marismas del río Barbate, términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz), anulándola por no ser conforme a Derecho".

La sentencia indica en su Fundamento Segundo:

(...) se observa el incumplimiento de las exigencias impuestas por el artículo 42.6 de la LRJPAC para la ampliación del plazo de resolución y notificación del expediente administrativo, pues pretende justificarse en atención a "la escasez de medios personales tanto en la Demarcación de Costas como en los Servicios Centrales", lo que no constituye circunstancia que autorice la ampliación pretendida, que, como dijimos, solo puede encontrar válido sustento en que el previsible incumplimiento del plazo máximo de resolución sea debido al número de "personas afectadas" por el procedimiento, a las que ninguna referencia se hace en la resolución de ampliación.

Plaza de San Juan de la Cruz s/n
28071 – Madrid
TEL.: 91 5976000





Además, la carga de trabajo que soporte el Servicio administrativo correspondiente en relación con los medios personales de que disponga, a la que apela la resolución de ampliación, no se contempla en el precepto examinado como circunstancia que habilite la ampliación del plazo de resolución y notificación de los procedimientos administrativos. De cualquier manera, en modo alguno se lleva a cabo en la resolución ampliatoria cuestionada, una "motivación clara de las circunstancias concurrentes", como exige el artículo 42.6 de la LRJPAC.

Por otro lado, la referencia a las características o "complejidad" del expediente de deslinde no es una justificación suficiente para la ampliación del plazo, pues tal circunstancia, inherente a la naturaleza de esta clase de procedimientos, determinó que el plazo de resolución y notificación de los expedientes de deslinde se estableciera en veinticuatro meses a contar desde su notificación por el artículo 12 de la Ley de Costas.

Por último, tampoco se justifica que, previamente a la ampliación, se hubieran "agotado todos los medios -personales y materiales- a disposición posibles", no bastando para ello con afirmar de forma genérica que "La habilitación de medios adicionales, resulta imposible si se tiene en cuenta las especializaciones jurídico-técnicas que se requieren para la realización de expedientes complejos de esta naturaleza".

Por todo ello, al ser improcedente en este caso la ampliación en 12 meses, del plazo de resolución y notificación del expediente de deslinde litigioso que se contiene en la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 5 de mayo de 2009, debe considerarse inválida esa ampliación y apreciarse la caducidad del procedimiento de deslinde".

III) Mediante O.M. de 24 de abril de 2014, se declaró nula y sin efecto, en el tramo de unos 248 metros comprendido entre los vértices M-7 a M-11, la citada Orden Ministerial de 21 de febrero de 2010, aprobatoria del deslinde.

IV) Mediante O.M. de 30 de septiembre de 2020 se aprobó el deslinde de dicho tramo (vértices M-7 a M-11). Previamente, el Servicio Jurídico de este Ministerio emitió informe, con fecha 10 de julio de 2020, en el que entró a considerar que la propuesta de resolución limitaba el nuevo deslinde al terreno comprendido entre los vértices M-7 a M-11, considerando que la totalidad del deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 21 de febrero de 2010 quedó sin efecto por caducidad del procedimiento frente a todos y no exclusivamente frente al recurrente.

En la citada Resolución de 30-09-2020, en relación con lo informado por el Servicio Jurídico se indicaba lo siguiente:

"Con relación al informe de Servicio jurídico, cabe indicar que el presente expediente se corresponde exclusivamente al tramo considerado entre los vértices M-7 a M-11, el cual, tal y como asimismo se reconoce en el informe del Servicio Jurídico, se ha tramitado conforme a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio.

Por lo que se refiere al resto del tramo de deslinde, habrá de ser objeto, en su caso, de un expediente aparte".





CONSIDERACIONES:

1) Visto el fallo de la sentencia firme de la Audiencia Nacional, de fecha 18 de abril de 2013, dictada en el recurso contencioso-administrativo número nº 416/2010, así como lo informado por el Servicio Jurídico el 10-07-2020, procede ejecutar la sentencia en sus propios términos.

2) En sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 24 de noviembre de 2011, relativa al recurso contencioso-administrativo nº 716/2009, interpuesto contra la aprobación de otro expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, en el Fundamento Jurídico Segundo, se indica "...Todo ello obliga a declarar caducidad del expediente de deslinde en relación al tramo de costa...sin necesidad de entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada. Y todo ello sin perjuicio de que la Administración pueda, en su caso, incoar nuevo procedimiento de deslinde respecto de este tramo, dado que los bienes de dominio público marítimo-terrestre son imprescriptibles, conforme preceptúan los artículos 132.1 de la Constitución y 7 de la Ley de Costas y de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley 30/1992 se establece la conservación y convalidación, dentro de lo posible, de los actos y trámites que hayan tenido lugar en el procedimiento anulado."

Por todo lo anterior,

ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR DELEGACIÓN, HA RESUELTO:

Declarar nula, por caducidad del expediente, la Orden Ministerial de 21 de febrero de 2010 que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, en el tramo de 38.894 metros, comprendido entre los vértices M-1 a M-7, y M-11 a M-612, que comprende las marismas del río Barbate, en los términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz).

Contra esta resolución cabrá plantear incidente de ejecución de sentencia, en los términos previstos en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

LA MINISTRA,
P.D. (O.M. TEC/1425/2018, de 17 de diciembre,
BOE de 29 de diciembre de 2018)
LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.: Ana Oñoro Valenciano

Documento firmado electrónicamente

